



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Carmen Lourdes Londoño de Rodríguez
DEMANDADO	UGPP
RADICADO	05-001-31-05-023-2018-00625
TEMA	Acrecimiento pensional
DECISIÓN	Confirma sentencia

El doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **045** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **CARMEN LOURDES LONDOÑO DE RODRÍGUEZ** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-**, con radicado 05-001-31-05-023-2018-00625.

• **PRETENSIONES:**

Aspira la demandante se condene a la demandada a acrecentar su pensión de sobrevivientes, la reliquidación de la misma, intereses moratorios, indexación de las condenas y costas procesales.

• **HECHOS**

Como fundamento de las pretensiones indicó que, mediante resolución 2001 del 13 de mayo de 1986, con ocasión de la muerte del señor Jaime Yesid Rodríguez Almanza, se le reconoció pensión de sobrevivientes en un 50% en calidad de cónyuge y el otro 50% en favor de sus hijos Melisa, Cristian y María

Fernanda Rodríguez Londoño. Que para el momento en que sus hijos cumplieron la mayoría de edad la ARL del ISS los retiró de la nómina. Que la pensión fue liquidada teniendo en cuenta 12 semanas de cotización, con un salario mensual base de \$54.891, lo que arrojó una mesada pensional para el año 1996 de \$32.935, teniendo en cuenta que el causante cotizó 548.71 semanas. Que le ha elevado múltiples solicitudes a la demandada para efectos de la reliquidación y acrecimiento pensional, pero estas han sido negadas por la entidad.

- **CONTESTACIÓN:**

La entidad demandada no dio respuesta a la demanda.

El Ministerio Público se pronunció proponiendo la excepción de prescripción.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Fue proferida por el Juzgado Vigesimaltercero Laboral del Circuito de Medellín el 19 de noviembre de 2019; en la que se resolvió:

(...)

PRIMERO: DECLARAR que la señora CARMEN LOURDES LONDOÑO DE RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 39.435.896, tiene derecho a que a la mesada pensional por sobrevivencia que devenga con motivo del deceso de su cónyuge JAIME YESID RODRÍGUEZ ALMANZA acrezca en el porcentaje que devengaron los hijos comunes de la pareja, SEBASTIÁN, CRISTIAN CAMILO, MELISA y MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ LONDOÑO, una vez se haya extinguido el último de ellos.

SEGUNDO: Consecuencialmente, se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP" a reconocer y pagar los valores correspondientes a partir del 22 de mayo de 2014, siempre que para esta fecha ya se hubiesen extinguido en su totalidad los derechos o alcúotas que por pensión de sobrevivientes percibían proporcionalmente los descendientes del causante atrás referidos.

Al efecto, deberá emitir el correspondiente acto administrativo en el término improrrogable de cuatro (4) meses, contado a partir de la firmeza de la presente decisión, susceptible de los recursos que caben en la vía gubernativa.

TERCERO: La reliquidación no comprenderá la diferencia habida entre el porcentaje inicialmente reconocido a la señora LONDOÑO DE RODRÍGUEZ con fundamento en el artículo 28 del Decreto 3170 de 1964, por un 25%, y el que prevé el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, en un 50%, por las razones expresadas en el cuerpo de esta decisión.

CUARTO: CONDENASE a la UGPP a pagar en favor de la demandante la indexación causada sobre el valor total a reconocer a partir de la ejecutoria de esta sentencia y hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo.

QUINTO: CONDENASE a la UGPP a pagar en favor de la demandante las costas procesales. Al Liquidarlas, la Secretaría tendrá en cuenta la suma de \$2.000.000 que se fijan como agencias en derecho.

*SEXTO: DECLARASE probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la PROCURADURÍA JUDICIAL PARA ASUNTOS LABORALES Y CIVILES, quedando afectadas las mesadas pensionales causadas desde el 22 de mayo de 2014 hacia atrás, con la salvedad realizada en la parte motiva de esta decisión en cuanto a la fecha en que verdaderamente nace el derecho de acrecer de la accionante.
(...)*

- **APELACIÓN:**

La decisión de instancia fue recurrida en apelación por la demandante, quien a través de su mandatario judicial expuso: que existe prueba, tal y como se manifiesta en el hecho tercero y que asimismo se desprende de las resoluciones aportadas como prueba la fecha en que a los hijos del causante les fue retirada la pensión, hecho ocurrido a mediados de los años 2000. Que en el expediente también reposa la copia de la cédula de ciudadanía de los hijos, de lo que se desprende que estos superan los 25 años de edad, por lo que el derecho de estos se extinguió mucho antes del año 2014, fecha para la cual se declaró probada la excepción de prescripción. Solicita como consecuencia, se precise en la sentencia los valores, pues también hay prueba del valor de la pensión que originalmente se reconoció, el cual es superior al salario mínimo. El segundo punto de apelación va dirigido a la excepción de prescripción, pues si bien al procurador judicial se le notificó de la existencia de este proceso, debe analizarse el momento en que a este le fue notificado y el momento en que propuso la excepción de prescripción. Hizo referencia a que hay una sentencia reciente de la Corte, sin especificar cuál, de que la intervención del procurador judicial no puede hacerse en cualquier momento, pues debe guardar unos términos para que se garantice la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Insiste en que no se opone a la intervención del Ministerio Público; sin embargo, advierte que la intervención de este no puede hacerse en cualquier etapa del proceso. Concluye que, en caso de corroborarse que la intervención de este no fue oportuna, se revoque la sentencia en este tema y se acceda a la pretensión reliquidatoria, de acrecimiento hasta que se verifique que el derecho de los hijos se extinguió.

- **ALEGATOS:**

Fueron presentados por la demandante en los siguientes términos:

(...)

También le asiste derecho a mi mandante al acrecimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que nunca le acrecieron su mesada cuando el último de sus hijos cumplió 25 años de edad, y perdió el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes. La ARL del ISS para entonces, empezó a retirar de la nómina de pensionados a los hijos de mi mandante, por cumplir la mayoría de edad y no continuar estudiando, primero retiro a CRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ LONDOÑO en el mes de septiembre de 1.999; acreciendo el derecho a sus hermanas, después fue retirada de la nómina de pensionados MELIZA RODRÍGUEZ LONDOÑO el 17 de Julio de 2.002; acreciendo el derecho a su hermana, y por último fue retirada de la nómina de pensionados MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ a partir del mes de Agosto de 2.005, como consta en las resoluciones N° 0669 del 17 de julio de 2.002, N° 0287 del 31 de Mayo de 2.004 y N° 0292 del 14 de marzo de 2.005.

La ARL del Instituto de Seguros de Seguros Sociales para entonces, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP acreció el derecho de los hijos de mi mandante, cuando sus hermanos perdían el derecho, pero nunca acreció el derecho de la señora CARMEN LOURDES LONDOÑO DE RODRÍGUEZ cuando el último de sus hijos cumplió 25 años de edad, y perdió el derecho.

Aplicar el Decreto 3170 de 1.964, como lo pretende hacer la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, en este caso en particular, resultaría ilegal e inconstitucional, por ir en contravía de la Constitución Política de Colombia y de las leyes posteriores y especiales que regulan el tema del acrecimiento pensional.

Con fundamento en los hechos descritos y en los documentos que reposan en el proceso, respetuosamente solicito se declare que a la señora CARMEN LOURDES LONDOÑO DE RODRÍGUEZ le asiste derecho a que la UGPP le re liquide mesada pensional y le acrezca su derecho, toda vez que la entidad demandada le está cancelando una mesada pensional inferior a la que realmente tiene derecho, y a que nunca le acrecieron el derecho cuando sus hijos perdieron el derecho de percibir la pensión de sobrevivientes, en ese sentido solicitó honorable magistrado confirme el fallo proferido en primera instancia.

(...)

- **DECRETO 806 DE 2020:** Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta que únicamente la demandante recurrió en apelación la sentencia de instancia, resulta claro que el Tribunal apenas tiene competencia para revisar los puntos de inconformidad expuestos por el mandatario judicial atendiendo a lo dispuesto en los artículos 66 y 66A del Código Procesal Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, se conocerá el asunto en grado de consulta, con ocasión de las condenas impuestas a la demandada.

Conforme a lo anterior, el **problema jurídico** a resolver es: **i)** determinar si la demandante tiene derecho a que la pensión de sobrevivientes de la que viene gozando debe ser acrecentada con ocasión de que sus hijos ya no son beneficiarios de la misma; **ii)** la excepción de prescripción propuesta por el Ministerio Público; y **iii)** la procedencia o no de condenar en concreto.

i) Acrecimiento pensional

Mediante resolución 02001 del 13 de mayo de 1986, el Instituto de Seguros Sociales reconoció una pensión de sobrevivientes de origen profesional a la demandante en cuantía mensual de \$11.761, y a cada uno de sus 3 hijos la suma de \$7.058. Prestación que hoy se encuentra a cargo de la UGPP.

La demandante ha elevado varias solicitudes de reajuste pensional como consecuencia del acrecimiento con ocasión a que sus hijos ya no son beneficiarios de la pensión, solicitudes que han sido negadas por la demandada.

Atendiendo la fecha del fallecimiento del causante, esto es, 11 de octubre de 1985, la normatividad vigente para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es el Decreto 2496 de 1982, el cual modificó el artículo 28 del Decreto Ley 3170 de 1964 que regía, y dispuso que la distribución personal para sobrevivientes en caso de muerte por riesgos profesionales será lo que consagra el artículo 21 del Acuerdo número 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966. En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL15873-2017, radicación 51878 del 27 de septiembre de 2017:

(...)

Pues bien, se advierte que de antaño, esta Sala tiene definido que el derecho a la pensión de sobrevivientes se dirime a la luz de la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. En este caso, el deceso se produjo por razones de origen profesional el 1.º de junio de 1985, por lo que la norma aplicable es el Decreto 2496 de 1982 que hizo «unas modificaciones al reglamento general del Seguro Social Obligatorio de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional» y derogó expresamente el artículo 28 del Decreto Ley 3170 de 1964 que regía, para disponer que «la distribución personal para sobrevivientes en caso de muerte por riesgos profesionales será lo que consagra el artículo 21 del Acuerdo número 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966».

De esta manera, el Decreto 2496 de 1982 no se limitó a declarar la insubsistencia de la disposición aludida, sino que ordenó acudir al artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, referente a las prestaciones por muerte de origen común, para definir la distribución de las cuotas entre los beneficiarios de las pensiones de sobrevivientes por riesgo profesional.

Nótese entonces que a partir de la derogatoria del año 1982 las pensiones de sobrevivientes de origen profesional y común se regularon por la misma norma en lo atinente a asignaciones para los beneficiarios, norma que reconocía para el cónyuge supérstite el 50% y para los hijos del difunto el 20% «de la pensión de invalidez o de vejez que tenía asignada el causante, o de la que habría correspondido a la fecha del fallecimiento».

(...)

Esto, lo que quiere decir, es que no podía el colegiado de instancia afincarse en los artículos 28 y 29 del Decreto 3170 de 1964 para liquidar la pensión de sobrevivientes por riesgo profesional, ya que el Decreto 2496 de 1982 los suprimió y dispuso expresamente que el vacío normativo se supliría con el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, en el que se estableció que las pensiones de los beneficiarios serían del 50% y del 20% de la pensión de invalidez o de vejez que le habría correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, según se tratara de cónyuge o hijos.

(...)

Ahora, en lo que tiene relación al acrecimiento de la pensión, el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, establece “La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de la que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento, excluidos los aumentos dispuestos en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno”; asimismo, el artículo 23 de la misma normatividad estipula “Si las pensiones de sobrevivientes a los beneficiarios de un mismo causante han sido reducidos proporcionalmente por aplicación de lo dispuesto en la primera parte del artículo 61 de la ley 90 de 1946, y luego se redujere

posteriormente el grupo de beneficiarios por muerte o extinción del derecho de cualquiera de sus integrantes, el monto de la pensión disponible por este motivo crecerá proporcionalmente a las pensiones de los beneficiarios restantes, sin que tales pensiones reajustadas puedan sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento”

En sentencia SL6079-2014, radicación 37169 del 14 de mayo de 2014, misma que fue citada por el juzgado del conocimiento, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo relacionado al acrecimiento pensional, puntualizó que, en el entendido del Decreto 3041 de 1966, la pensión de sobrevivientes deberá acrecer el derecho de la cónyuge en un 100 % de la prestación una vez extinguido el derecho en cabeza de sus hijos, esto es, tiene derecho a acrecer cuando falte uno de los órdenes. Así se pronunció la Corporación:

(...)

Al compás de las referidas disposiciones, como lo concluyó la juez de primera instancia, teniendo la cónyuge supérstite un 50% de la pensión de sobrevivientes, así opere cualquiera de las causas por las cuales se extingue el derecho de los descendientes, no es posible acrecer su derecho, por cuanto no resulta dable «sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento», esto es, para el presente caso, el 50% que ya tiene.

Sin embargo, los anteriores raciocinios tampoco resultan plenamente acertados para la hipótesis analizada, en vista de que en la fecha del fallecimiento del señor LUIS ENRIQUE ARENAS CASTAÑEDA se encontraban vigentes otras disposiciones que varían sustancialmente la regulación de los acrecimientos pensionales contenida en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Concretamente, en el presente asunto son aplicables la Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975, que establecen normas en materia de pensiones de sobrevivientes y sustitución de pensiones de jubilación para trabajadores del sector privado y oficial.

En torno a tal tema, esta Sala de la Corte asentó que, en materia de acrecimientos pensionales, los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y, concretamente, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, deben entenderse modificados por las previsiones incluidas en la Ley 33 de 1973. Dijo la Corte en este aspecto:

De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1973 las viudas tienen derecho a la sustitución pensional total vitalicia a la que tenía derecho su cónyuge y no al 50% de que trata el artículo 21 del Acuerdo 224 de 1966 del Consejo Directivo del I.C.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, pues tal norma fue modificada tácitamente por el artículo 1 de dicha Ley.

(...)

Los hechos anteriores indican que la demandante en su calidad de viuda y único beneficiario tiene derecho a gozar de una pensión sustitutiva vitalicia en cuantía de \$5.656.24, a partir de la fecha del fallecimiento de su cónyuge

enero 1º de 1975. Sentencia del 8 de octubre de 1979. Rad. 5870, Sección Segunda. Acta No. 41.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, «Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagara, el 50% al cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales.» Asimismo, dispone la norma que “La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben las demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.”

En igual sentido, el artículo 3 de la Ley 12 de 1975 prevé que el “Cónyuge supérstite e hijos que concurrirán por mitades, con derecho a acrecer cuando falte uno de los órdenes o se extinga su derecho, lo propio que los hijos entre sí.” (negritas fuera de texto).

Ahora bien, una lectura apropiada de las citadas disposiciones permite comprender que existe una suerte de gradación de los acrecimientos, en tratándose del cónyuge y de los descendientes, de la siguiente forma:

i) En primer lugar, si el orden de beneficiarios hijos subsiste, únicamente resulta dable incrementar el derecho a la pensión de sobrevivientes en el interior del respectivo orden. Es decir, cualquier extinción de la fracción de uno de los descendientes debe mejorar la de los restantes, que integran el mismo orden. Por ello las disposiciones en cita prescriben un acrecimiento de «los hijos entre sí».

ii) En segundo lugar, una vez extinguido el orden de hijos en su totalidad, cuando no existe por lo menos uno de ellos, opera un acrecimiento entre diferentes órdenes, en este caso de la cónyuge sobre el 100% de la prestación. La norma habla en este punto de un «(...) derecho a acrecer cuando falte uno de los órdenes».

*Con lo anterior se quiere significar que si existen dos descendientes, como en este caso, cuando cesa el derecho de uno de ellos, el acrecimiento debe darse hacia el otro, en la medida en que el orden no ha fenecido en su totalidad. Asimismo, una vez se extinga plenamente el orden, la cónyuge podría extender su derecho al 100% de la prestación, acudiendo a la segunda probabilidad planteada.
(...)*

De lo anterior se concluye que la demandante tiene derecho a que la mesada que percibe como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor RODRÍGUEZ ALMANZA se acrezca en un 100%, a partir del momento en que la totalidad de sus hijos, también beneficiarios de la prestación, se les extinguió el derecho.

No obstante lo anterior, en el presente asunto no hay claridad de si a la demandante en la actualidad le fue acrecentada la pensión. Ello obedece, por una parte, que la UGPP no compareció al proceso para efectos de pronunciarse acerca de los hechos y pretensiones de la demanda y aportar las pruebas que considere necesarias; por otra parte, si bien la demandante aportó las resoluciones 02001 de 1986 por medio de la cual se le reconoció la

pensión de sobrevivientes; 0669 de 2002 que activó en nómina a MELIZA RODRÍGUEZ; 0287 de 2004 que activó en nómina a MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ; 0292 de 2005 que activó en nómina a la demandante y a su hija MARÍA MELIZA RODRÍGUEZ; y, RDP 029873, 033770 y 035531 de 2017 que negaron la reliquidación pensional, del contenido de estas últimas, en especial la 033770, se lee que mediante resolución RPD 016435 del 21 de abril de 2016 la demandante fue reincorporada a nómina de pensionados percibiendo una pensión de \$749.153 que corresponde al 100%.

Para la Sala causa extrañeza que la parte actora, quien allegó al expediente 7 resoluciones, no hubiere aportado la del 21 de abril de 2016 que refiere al acrecimiento pensional.

Del contenido de la resolución 0669 de 2002 se desprende que la pensión percibida por la accionante para dicho año ascendía a \$211.000, valor que al reajustarse conforme lo dispone el artículo 14 de la ley 100 de 1993 asciende a \$398.887 para 2016, lo que es contrario a los \$749.153 de que trata la resolución RPD 016435, la cual, se insiste, no milita en el expediente. La prueba que sí se aportó son las colillas de pago¹ de mesadas pensionales hechas por el Instituto de Seguros Sociales y Positiva S.A., que dan cuenta que el valor de la mesada para 2014 es de \$676.880 y para 2015 de \$701.654, sumas que reajustas para el año 2016 asciende a \$749.156.

Conforme a lo explicado, no hay claridad de los dineros pagados a la demandante por concepto de pensión de sobrevivientes, tampoco hay prueba de si en la actualidad la mesada se encuentra acrecida con ocasiones de que sus hijos ya no son beneficiarios de la prestación, razones por las cuales, la sentencia merece ser **CONFIRMADA** en lo que respecta a la orden de acrecer la mesada pensional de la señora LONDOÑO DE RODRÍGUEZ. Es necesario resaltar que la parte actora no recurrió la decisión de instancia en lo relacionado a la reliquidación de la pensión, pues lo hizo únicamente frente a lo que tiene que ver con el acrecimiento pensional, la condena en concreto y la excepción de prescripción.

ii) Excepción de prescripción

¹ Folios 61

Alega la parte actora que no le es permitido al MINISTERIO PÚBLICO proponer la excepción de prescripción en cualquier etapa del proceso.

En el caso de autos, la demandada UGPP no compareció al proceso. Sin embargo, mediante escrito radicado en la oficina de apoyo judicial de esta ciudad el 21 de enero de 2019², la Procuradora 3ª Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social propuso la excepción de prescripción.

Ahora bien, respecto de la intervención del Ministerio Público, la jurisprudencia del órgano de cierre en la justicia ordinaria en su especialidad laboral, ha advertido que tal organismo podrá, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, conforme a la autorización otorgada por la Constitución Política. Así se pronunció la Corte en sentencia del 7 de octubre de 2008, radicado 32641, reiterada en la del 23 de septiembre 2009 con radicado 36132 y la del 19 de noviembre de 2014 con radicado 33853.

(...)

Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto 262 de 2000).

Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 (ibídem), en su inciso final, “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que

² Folios 91

considere necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral.
(...)

Conforme a lo dicho, le asiste razón al juzgado de primera instancia al declarar probada la excepción de prescripción frente a las mesadas causadas con anterioridad al 22 de mayo de 2014 como consecuencia de la reclamación hecha a la entidad los mismos día y mes de 2017 conforme se lee en la resolución RPD 029873 del 26 de julio de 2017, prescripción trienal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** la sentencia en tal sentido.

iii) Condena en concreto

Atendiendo a que, como se dijo previamente, no hay claridad de los dineros pagados a la demandante por concepto de pensión de sobrevivientes y del valor que actualmente percibe, no le permite a esta Sala realizar una condena en concreto de la obligación a cargo de la demandada.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por la demandante.

Corolario de todo lo dicho, la sentencia de primera instancia merece ser **CONFIRMADA**, íntegramente.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. En la segunda instancia no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocidas.

Las costas procesales quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 045 del 15 de marzo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>